

# Allanamientos y registros ilegales: una mirada a la jurisprudencia nacional

## Illegal searches and searches: a look at national case law

CHÁVEZ RAMÍREZ, Javier(\*)

**SUMARIO:** I. Introducción. II. El caso. III. Allanamiento y la real intervención. IV. Requisitos de la flagrancia delictiva. V. Comprensión de quien autoriza el ingreso a su domicilio. VI. Prohibición de allanamientos en delitos permanentes. VII. Allanamiento sin presencia del representante del Ministerio Público o del abogado defensor. VIII. Ilegalidad de la prueba obtenida. IX. Conclusiones. X. Lista de Referencias.

**Resumen:** En el presente trabajo se pretende dilucidar, si los allanamientos y registros domiciliarios realizados por los miembros de la Policía Nacional del Perú ante la comisión de delitos, cumplen o no, con lo señalado por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de la República; además de ello, se establecerá ante qué tipos de delitos es procedente este tipo de intervenciones; finalmente, si es imperativa o no la orden judicial, así como la presencia del representante del Ministerio Público en el lugar de los hechos.

**Palabras clave:** Allanamiento, registros domiciliarios, Policía Nacional, delitos

---

(\*) Abogado. Maestro en Derecho Penal y Criminología.

**Abstract:** *In this paper is intended to elucidate, whether the raids and house searches carried out by members of the National Police of Peru before the commission of crimes, comply or not, with what is indicated by the Constitutional Court and the Supreme Court of the Republic; in addition, it will be established what types of crimes this type of intervention is appropriate; finally, whether or not the court order is mandatory, as well as the presence of the representative of the Public Prosecutor's Office at the scene of the incident*

**Keywords:** *Search, house searches, National Police, crimes.*

## I. Introducción

En los allanamientos y registros domiciliarios que realizan los miembros de la Policía Nacional del Perú, —*en especial en los casos de drogas*—, se advierte que estas se vienen realizando violando derechos fundamentales, lo que las tornan en ilegales; esto sucede por el desconocimiento del personal policial interviniente, puesto que se encuentran en el incorrecto entendido, que están frente a la comisión de un delito flagrante y la urgente necesidad de su intervención, lo cual no es correcto, sumado a ello la falta de la dirección jurídica del representante de la legalidad.

## II. El caso

Para un mejor entendimiento de lo que se va a desarrollar, se expondrá un caso hipotético a modo de ilustración: El departamento especializado antidrogas de la PNP (DEPANDRO), recibe una llamada telefónica anónima, donde se indica que en el interior de una casa existe droga, por lo que personal PNP, decide constituirse hasta el lugar, allanando e ingresando al domicilio, manifestando que se encuentran en un supuesto de flagrancia; en el inmueble encuentran dos bolsas conteniendo marihuana con un peso bruto de dos kilogramos. Los propietarios del inmueble son detenidos y conducidos a la dependencia policial, dicha actuación es comunicada al fiscal, quien avala la intervención y dispone la detención de los intervenidos hasta por quince días.

Como se evidencia en el ejemplo, los policías intervienen el lugar bajo el erróneo conocimiento que se encuentran amparados por el art. 259 del Código Procesal Penal, es decir, los intervenidos se encontraban en flagrancia delictiva, además, que estas actuaciones policiales son actos urgentes e inaplazables. Como veremos más adelante, esta actuación es ilegal y violatoria de derechos fundamentales.

### III. Allanamiento y la real intervención

El allanamiento y registro domiciliario, pueden realizarse sin mandato previo judicial en los casos de flagrante delito o inminente peligro de su perpetración art. 214 del Código Procesal Penal.

En el plano real, las intervenciones policiales se inician a mérito de una supesta llamada telefónica, lo que en realidad es una delación —en palabras del reconocido profesor Giammpol Taboada Pilco— personal policial acude al lugar donde se encuentra el ilícito producto, violenta la puerta de ingreso, reduce a las personas que allí se encuentran, se incautan los bienes encontrados y se elabora el acta de intervención policial donde se señala, que el ingreso a dicho recinto ha sido con autorización expresa de los intervenidos. Seguidamente se da cuenta al fiscal vía telefónica, quien, en el mejor de los casos, se constituye al lugar o se traslada a la unidad especializada donde se encuentran los detenidos y los bienes incautados.

### IV. Requisitos de la flagrancia delictiva

Ahora bien, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la casación 533-2018 Lambayeque, ha establecido los requisitos de la flagrancia:

- **Inmediatez temporal:** la acción delictiva se está desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento de su percepción o intervención.
- **Inmediatez corporal:** el delincuente se encuentre en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito que proclamen su directa intervención en el mismo.
- **Percepción directa y efectiva del hecho por el efectivo policial:** visto directamente o percibido de otro modo por material fotográfico o fílmico.
- **Necesidad urgente de la intervención policial.**

En el caso a modo de ejemplo, se evidencia que al momento del allanamiento no se estaba frente a un supuesto de flagrancia, en primer lugar, porque no existe inmediatez delictiva y segundo y, más importante, no existía la necesidad urgente de allanamiento, siendo este el requisito más importante para la configuración de la flagrancia; por tanto, podían los policías solicitar al fiscal que requiera el allanamiento al juez, lo cual claramente no sucedió.

Además, en la casación señalada, se estableció que el allanamiento y registro domiciliario «solo es posible en los casos de **flagrancia estricta y de cuasi flagrancia**, esta última entendida como el momento en el que se persigue al im-

putado sin solución de continuidad y se advierte su presencia en el predio donde estaba o, de donde salía tras su fuga».

En el ilustrativo caso, los efectivos policiales no se encontraban frente a ninguna de estas dos modalidades, por lo que no existió justificación para el allanamiento y registro domiciliario que se realizó.

## V. Comprensión de quien autoriza el ingreso a su domicilio

El Tribunal Constitucional, en el Exp. 03691-2009-PHC/TC Cajamarca, caso «Luz Emérita Sánchez Chávez y otro», fs.jj. 13 y 14 indica, que quien autoriza el ingreso a un recinto, debe tener pleno conocimiento del motivo de la intromisión y esta debe ser entendida claramente por el titular del derecho, de no darse esta situación, no se podría realizar el allanamiento; sin embargo, nos encontramos muchas veces con intervenciones donde supuestamente ha mediado el consentimiento expreso para su ingreso; empero, se advierte que existen daños en las puertas, ventanas y/o lugares de acceso al recinto, donde se habría producido el «voluntario allanamiento».

## VI. Prohibición de allanamientos en delitos permanentes

Los allanamientos y registros en flagrancia delictiva, únicamente se pueden realizar **cuando se está frente a la comisión de delitos de consumación instantánea**, puesto que, en los **delitos permanentes**, no se configuraría el principio de situación de urgencia, que impida recabar la autorización judicial [1]

Además, el supremo interprete de la Constitución, ha señalado lo siguiente:

En los delitos de: tenencia ilegal de armas, **drogas**, contrabando, cuya posición continuada se indica como almacenada al interior de un domicilio, se requerirá la previa autorización judicial. Pues aún, cuando puedan presentarse de manera concurrente los requisitos de flagrancia delictiva, en los delitos permanentes se presenta el decaimiento del supuesto de la extrema urgencia.

## VII. Allanamiento sin presencia del representante del Ministerio Público o del abogado defensor

En el RN 2735-2014-Puno, caso «Wilfredo Hanco Cayllahua», se ha determinado que las diligencias policiales sin participación del representante del Ministerio Público, no tienen solvencia probatoria para determinar las responsabilidades del justiciable.

En esa misma línea, el RN 2874-2013 - Del Santa, caso «José Roberto Cáceres Quezada» señala, para que sea válido el acto del consentimiento a la entrada del domicilio, se debe exigir la presencia del fiscal o del abogado defensor del detenido, para de esa forma se pueda garantizar la diligencia, de lo contrario, el allanamiento sería inconstitucional.

## VII. Ilegalidad de la prueba obtenida

Finalmente, las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales, se tornan en ilícitas y no podrían ser utilizadas en el proceso penal; mucho menos, como fundamento que sustente una sentencia condenatoria.

Trayendo nuevamente a colación el ejemplo, se evidencia que, desde la toma de información, el desarrollo del allanamiento y término de la diligencia, se actuó vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio [2], al debido proceso [3], y a la dignidad de las personas [4].

## VIII. Conclusiones

En las diligencias de allanamiento, el requisito más importante es la necesidad urgente de intervención; sin embargo, en la gran mayoría de allanamientos bajo la errónea creencia de estar frente a situación de flagrancia, se procede sin darle la importancia que esta merece; es decir, no se analiza si es urgente o no la intromisión de la fuerza pública.

Por lo tanto, el llamado para determinar ante que tipo de flagrancia se encuentra el personal policial, es el director jurídico de la investigación, quien además señalará que tipo de presunto delito se está cometiendo y, si en este, existe una necesidad urgente para su allanamiento.

En el plano de los hechos, la policía al momento de un allanamiento da cuenta al fiscal, quien se limita a responder que se le consigne en el acta, la misma que firmará en la dependencia policial una vez concluida la diligencia, es más, la presencia de un abogado defensor en dicho procedimiento, es una utopía.

Nuestros valerosos policías, en aras de investigar y combatir el delito, como finalidad fundamental, realizan allanamientos y registros domiciliarios con violación de derechos fundamentales, lo cual torna en ilegal la prueba y genera un ambiente de impunidad. Pero esto sucede por falta de apoyo para capacitarse en métodos de intervención ajustados a las normas vigentes, se propone que el ejecutivo ponga énfasis en capacitar a las unidades policiales especializadas, para que sus intervenciones de desarrollen conforme a Ley.

## **X. Lista de referencias**

STC EXP. 03691-2009-PHC/TC Cajamarca, Caso Luz Emérita Sánchez Chávez y otro.

Constitución Política del Perú, art. 2 numeral 9.

Constitución Política del Perú, art. 139 numeral 3.

CIDH, art. 11.